

Una ola ciudadana reivindica unos servicios públicos y democráticos de agua en los municipios catalanes

Míriam Planas

Cataluña vivió su primera experiencia de remunicipalización del agua en 2010, en el municipio de Figaró. Siete años después, se han abierto las puertas para que se remunicipalicen los servicios (o se municipalicen en algunos lugares donde el agua nunca fue pública) y casi 3,5 millones de los siete millones de personas que viven en Cataluña, incluida la capital, Barcelona, podrían presenciar un cambio en el modelo de gestión del agua. Se trata de una oportunidad para avanzar en nuevas formas de gestión del agua como un bien común, que sean más democráticas y que garanticen el derecho al agua, tanto para cubrir las necesidades más básicas de las personas como para garantizar la conservación de los sistemas hídricos. La tendencia de la remunicipalización del agua en Cataluña forma parte de una tendencia más general en todo el Estado español, que se mantiene a pesar de los esfuerzos del Gobierno central, de carácter conservador, para ponerle freno.

El cuasi monopolio de Agbar en Cataluña

En Cataluña, el 83,6 por ciento de la población recibe el suministro de agua de compañías privadas. El Grupo Agbar (Aguas de Barcelona), filial de la multinacional francesa Suez, abastece a un 70 por ciento de la población, es decir, a unos 5,6 millones de habitantes. Y Aqualia, filial de la constructora FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), aproximadamente a otro medio millón. En el plano nacional, en torno al 57 por ciento de la población española recibe agua de un proveedor privado. Agbar, cuya sede se encuentra en Barcelona, es, con diferencia, el actor dominante

en el mercado español. Así pues, históricamente, Barcelona y Cataluña habían conformado el bastión de la gestión privada del agua en el país.

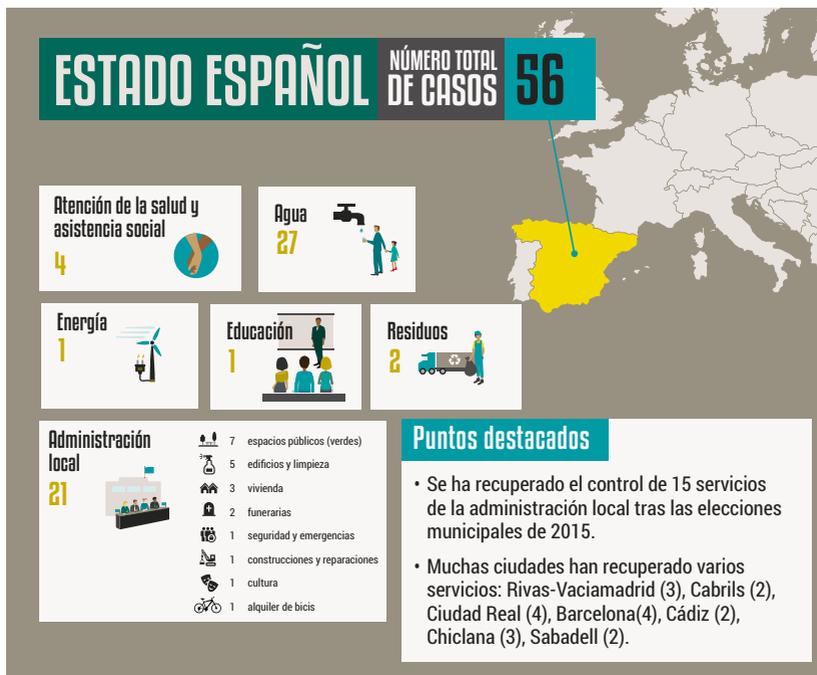
En Cataluña, la gestión privada se concentra en las ciudades grandes y medianas, ya que tienen más población y, por lo tanto, garantizan una mayor capacidad de retorno de las inversiones y el pago de tarifas. En el resto del territorio, existe una larga tradición de gestión pública, que se despliega en 450 pequeñas localidades, es decir, la mitad de los municipios de Cataluña, aunque estos solo representan el 16,4 por ciento de la población.

Según un informe de 2011 del Tribunal de Cuentas español,¹ la gestión privada del agua es un 22 por ciento más cara para las poblaciones pequeñas y medianas que la gestión pública, y que el modelo privado presenta, de promedio, un rendimiento peor. En Cataluña, el promedio de los precios en los municipios gestionados de forma privada es un 25 por ciento más elevado que el promedio en los municipios con gestión pública. En el área metropolitana de Barcelona (que abarca la propia ciudad y otros 22 municipios a su alrededor), la plataforma 'Aigua és Vida' calcula que las tarifas del agua de Agbar son un 91,7 por ciento más caras que en poblaciones vecinas, como El Prat de Llobregat y Barberà, donde la gestión es pública.

Sin embargo, la situación del abastecimiento de agua en Cataluña podría estar a punto de cambiar de forma radical, ya que 14 municipios catalanes ya han municipalizado o remunicipalizado el servicio. En los próximos años (2017 a 2025; véase el anexo), unos 90 municipios, donde viven unos 3,5 millones de personas, finalizan sus contratos de concesión. Además, muchos de los contratos privados vigentes hoy en día no se han sometido al debido concurso público. Decenas de ayuntamientos ya han decidido estudiar la posibilidad de (re)municipalizar el agua y cambiar de modelo. Todo ello, sumado a las dinámicas movilizaciones y plataformas ciudadanas que reivindican una gestión del agua pública y democrática en Cataluña y en todo el Estado español, ha dado lugar a la actual ola (re)municipalizadora.

Cambio de escenario: la ola de (re)municipalizaciones

En 2015, en muchas ciudades españolas, incluidas Madrid y Barcelona, subieron al poder coaliciones progresistas dirigidas por ciudadanos y ciudadanas. Fue la culminación de años de campaña por parte de movimientos ciudadanos a favor del acceso a derechos básicos y contra la corrupción de los partidos políticos tradicionales y sus estrechas conexiones con las grandes empresas. A su vez, creó un entorno político favorable para las remunicipalizaciones. Valladolid (300 000 habitantes) es la ciudad más grande que hasta el momento ha remunicipalizado los servicios de agua en el Estado español.² El Ayuntamiento ha decidido retomar la gestión pública cuando venza el contrato con Agbar, en julio de 2017. Aunque no cabe en el marco de este capítulo, es importante señalar que muchos de estos municipios (que no están dirigidos necesariamente por coaliciones progresistas) no solo se han embarcado en la misión de remunicipalizar el agua, sino también otros servicios. Sin embargo, un obstáculo importante se encuentra en el Gobierno central, que está intentando impedir que las ciudades remunicipalicen servicios públicos. En abril de 2017, el Gobierno central presentó un borrador de los Presupuestos Generales que incluía una disposición adicional (la número 27) que generó una gran preocupación, aunque finalmente no se adoptó tal como se había propuesto.³ La norma habría impedido transferir personal del sector privado a cualquier nuevo organismo público, con el objetivo último de que los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras se posicionaran en contra de las remunicipalizaciones. Por otro lado, habría supuesto que se perdiera la experiencia acumulada y se creara una falta de personal calificado para proporcionar los servicios. El Gobierno central también ha luchado de forma directa contra la remunicipalización en Valladolid. En marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, interpuso una demanda⁴ con el objetivo de evitar que se traspase el personal de la compañía privada a una nueva empresa pública, amparándose en la normativa en materia de ajustes presupuestarios.



El año 2016 marcó un punto de inflexión en la gestión del agua en Cataluña y en todo el Estado español. En el mes de marzo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló el contrato de la empresa mixta (público-privada) que abastece de agua a 23 municipios del área metropolitana de Barcelona. En abril, Collbató, un municipio de 4000 habitantes, se convirtió en el 12.º municipio en recuperar la gestión del servicio en Cataluña, y se encontró con unas pérdidas en la red de más del 60 por ciento. En noviembre, se celebró en Madrid el primer encuentro de ciudades por el agua pública, que contó con la participación de siete alcaldes y alcaldesas de algunas de las ciudades más grandes del Estado, operadores públicos de agua y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de este acontecimiento, hasta entonces inédito, era fortalecer y coordinar el movimiento del agua en todo el país, en especial en un contexto en el que el Gobierno central se mostraba firmemente en contra de la remunicipalización. Y finalmente, en diciembre, finalizó el contrato de agua de

la ciudad de Terrassa (215 000 habitantes) con la compañía privada Mina Pública de Terrassa (propiedad de Agbar en un 35,5 por ciento), después de 75 años de concesión.

La tendencia se mantuvo en 2017, año en el que nueve municipios del área metropolitana de Barcelona —que representan a tres de cada cuatro habitantes de la zona— aprobaron mociones a favor de estudiar la gestión pública del agua. El 19 de marzo de 2017, Terrassa fue testigo de la primera gran manifestación a favor de la gestión pública en Cataluña, con la participación de 4000 personas. Tres días después, se anunció la creación de la Asociación Catalana de Municipios por la Gestión Pública del Agua. Los municipios que integran la asociación son Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat del Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, cuya población suma un total de 2,5 millones de habitantes. Su objetivo es trabajar por un nuevo modelo de gestión pública vinculado con la promoción de nuevas formas de control social que garanticen la transparencia, la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana efectiva. La asociación, además, se compromete a ofrecer asistencia, conocimientos y apoyo a todos aquellos municipios que deseen apostar por este modelo de gestión.

Este giro radical hacia un nuevo modelo se debe en gran medida al trabajo que durante años han desarrollado muchas plataformas ciudadanas para recuperar la gestión del servicio y denunciar las irregularidades y el lucro privado: *Taula de l'Aigua* en Terrassa; *Aigua és Vida Girona* en Girona, una ciudad cuyo contrato vence en 2020; *Aigua és Vida Anoia* en Igualada; *Volem l'aigua clara i neta* en Torelló, donde el contrato finaliza en 2018; *Taula de l'Aigua de Mollet* en Mollet del Vallès, donde el Ayuntamiento ya ha aprobado un estudio para remunicipalizar el servicio cuando venza el contrato, en 2020; y *Aigua és democràcia* en La Llagosta.

El caso de Terrassa: una concesión que se acaba después de 75 años

La compañía privada Mina d'Aigües de Terrassa S.A. gestionó el servicio de agua en Terrassa durante 75 años, en el marco de una concesión que finalizó el 9 de diciembre de 2016. En marzo de 2014, un grupo de personas de movimientos vecinales, sociales y otras a título individual crearon la *Taula de l'Aigua*, una plataforma con el objetivo de recuperar la gestión pública i directa del agua en la ciudad, con participación ciudadana y control social.

Mina es una filial del Grupo Agbar, que controla la gerencia y posee el 35,5 por ciento de las acciones. En 2013, en el que fue el primer conflicto entre la concesionaria y el Ayuntamiento, la compañía presentó una propuesta para aumentar la tarifa un 6 por ciento. El Ayuntamiento solicitó que se justificara ese aumento y acabó rechazándolo, al igual que la Comisión de Precios de Cataluña; en su lugar, propuso un incremento del 1,25 por ciento.

Al acercarse el fin de la concesión, la ciudad empezó a investigar las opciones de las que disponía y a solicitar información de la concesionaria, algo hasta entonces inaudito. La ciudadanía también pidió información al Ayuntamiento, pero Mina se negó a facilitar la mayor parte de esta. Algunos aspectos importantes, como el precio del agua de los pozos de Mina o los costes desglosados del servicio, aún no se conocen. El alcalde de Terrassa expresó claramente su insatisfacción con la forma en que la compañía, que en teoría estaba al servicio del Ayuntamiento, estaba entorpeciendo la demanda de datos con el fin de obstaculizar una posible remunicipalización.

Tras dos años de labor pedagógica y divulgativa por parte de Taula de l'Aigua, se consiguió que el agua fuera un tema central de la agenda política del municipio. En julio de 2016, el Ayuntamiento aprobó una moción a favor de la gestión directa del agua. De los 27 concejales y concejalas de

la ciudad, 20 se manifestaron a favor, tres se abstuvieron y cuatro votaron en contra. La compañía privada afirmaba que el coste de recuperar el servicio sería de 60 millones de euros. El Ayuntamiento, sin embargo, considera que no superará los dos millones. Cuando el Ayuntamiento confirmó el fin de la concesión y el retorno del sistema a la ciudad, en diciembre de 2016, Mina recurrió a los tribunales para invalidar las resoluciones, hasta ahora sin éxito.

El segundo paso de todo este proceso consistió en planificar un nuevo servicio público. *Taula de l'Aigua* de Terrassa, junto con el Consejo de Entidades de Terrassa, convocó el primer Parlamento Ciudadano del municipio, donde se aprobaron dos mociones que posteriormente se presentaron al Ayuntamiento, sobre los objetivos del futuro modelo de gestión y sobre el control social del servicio. Para reivindicar el agua pública y democrática, en marzo de 2017 se organizó en Terrassa una gran manifestación, en apoyo de la decisión del Ayuntamiento de poner fin al contrato.



Manifestación en Terrassa
Fotografía: EPSU, Twitter

El Día Mundial del Agua de 2017, más de 4000 personas llenaron las calles de Terrassa para celebrar el cambio de rumbo en el servicio municipal.

En abril de 2017, el Ayuntamiento de Terrassa puso en marcha el proceso para desarrollar el modelo por el que se gestionará el suministro de agua en la ciudad, que se debe aprobar antes del fin de 2017. Mientras tanto, a la compañía Mina se le ha ampliado la concesión de forma temporal. Durante todo este proceso, la *Taula de l'Aigua* seguirá promoviendo la propuesta de modelo de gestión aprobada por el Parlamento Ciudadano en febrero de 2017, con el fin de que el proceso de recuperación del agua en Terrassa sea también un paso más en la gestión del agua como un bien común.

La remunicipalización del agua en Terrassa es la punta de lanza de la recuperación del servicio de la gestión pública en Cataluña, del mismo modo que la (re)municipalización del agua es la punta de lanza de las remunicipalizaciones de otros servicios básicos. Por lo tanto, el éxito de la remunicipalización de Terrassa y la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión, con una participación ciudadana eficaz, abriría las puertas de muchas otras remunicipalizaciones progresistas y democráticas en las ciudades catalanas.

Barcelona: una oportunidad histórica

La siguiente de la lista podría ser la ciudad de Barcelona y los 22 municipios de su área metropolitana. El agua en Barcelona siempre ha estado bajo el control de la compañía privada Agbar, sin que existiera el debido contrato. En 2010, un juez dictaminó que esta gestión era ilegítima, y obligó a Agbar y al área metropolitana de Barcelona a firmar de manera apresurada un contrato de asociación público-privada (APP) para regularizar la situación. Al principio, Agbar poseía el 85 por ciento de las participaciones de la APP, y el área metropolitana, el 15 por ciento. Posteriormente, Agbar transfirió el 15 por ciento de sus acciones al banco La Caixa.

No obstante, esta nueva APP se aprobó para un período de 35 años, sin un proceso de concurso público y sin una buena justificación técnica. Por ese motivo, en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló el

contrato. Agbar interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo del Estado español. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha aprobado en su pleno municipal la elaboración de los informes técnicos y jurídicos necesarios para la transición hacia la gestión pública del agua. Eau de Paris, el operador remunicipalizado de la capital francesa, ha accedido a prestar apoyo jurídico y técnico para esta labor, mientras que Agbar, una vez más, se niega a cooperar y a proporcionar información. Otros ocho ayuntamientos del área metropolitana han seguido los pasos de Barcelona y han aprobado mociones a favor de estudiar la gestión pública del agua. En paralelo, la ciudad de Barcelona ya ha remunicipalizado otros servicios públicos (como jardines de infancia y servicios de prevención de la violencia de género) y ha creado una nueva compañía pública de electricidad.

La participación como ancla

La remunicipalización no solo tiene que ver con que los municipios recuperen el gobierno del servicio y la gestión pública. Si de verdad deseamos que la remunicipalización se afiance y fomente unos servicios de agua democráticos, eficaces y sostenibles, debemos gestionar el agua como un bien común. Es por ello que la participación ciudadana es fundamental en el ámbito de los servicios públicos remunicipalizados, del mismo modo que lo ha sido a la hora de cómo impulsar la remunicipalización misma en Cataluña.

El agua no solo es vida para las personas, que no podemos vivir sin ella, sino también para el medioambiente, por lo que se debe proteger la calidad ecológica de todos los caudales de agua. Esto es de especial importancia en regiones mediterráneas como Cataluña, que ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático. La fuerte movilización ciudadana a favor del agua en Cataluña siempre ha estado vinculada con esta firme convicción de que el agua es un bien común. Las remunicipalizaciones en el sector del agua representan una herramienta de avance democrático para el municipalismo y exige que los municipios asuman una política de aguas que tenga en cuenta los límites y la calidad de las fuentes locales.

La gestión del agua es una herramienta clave para garantizar el equilibrio regional y el respeto del medioambiente, basada en un concepto del agua no como un recurso, sino como un bien natural y una parte esencial del ecosistema en el que vivimos.

¿Cómo debe ser la participación ciudadana? Cada municipio, cada plataforma, debe empezar a definir qué forma de gestión y gobernanza asegura una mejor implicación por parte de la ciudadanía. ¿Qué tejido social existe en el municipio? ¿Cuáles son los espacios de participación ya existentes? ¿Y cuáles se deberían abrir? ¿Quién debería participar? ¿En qué decisiones debería participar la ciudadanía?

La participación debe ser el ancla de este nuevo modelo de gestión del agua. Y el modelo debe servir para que la recuperación de la gestión pública del agua en los municipios suponga realmente un avance democrático, a través de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de formación y capacitación de la ciudadanía. Todo esto con el fin de mantener alejadas las viejas prácticas del modelo de gestión privada, caracterizados por la opacidad, la corrupción y el enriquecimiento de unos pocos a costa del agua.



Míriam Planas es integrante de Enginyeria sense Fronteres en Cataluña, donde trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo para garantizar un acceso universal a servicios básicos. También participa en Aigua és Vida, una plataforma ciudadana formada por más de 50 organizaciones que trabajan por una gestión del agua pública, democrática y no comercial.

Notas

- 1 Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011: <http://www.tcu.es/repositorio/fd3654bc-3504-4181-ade5-63e8a0dea5c2/11010.pdf>
- 2 Véase en detalle el caso de Valladolid en Remunicipalisation Tracker: http://remunicipalisation.org/#case_Valladolid
- 3 *Eldiario.es* (2017) El Gobierno carga contra los procesos de remunicipalización de los Ayuntamientos a través de los Presupuestos. 16 de abril. http://www.eldiario.es/politica/remunicipalizacion-presupuestos-ayuntamientos__0_631686916.html
- 4 *Eldiario.es* (2017) Montoro se enfrenta a Valladolid y se persona por primera vez en una causa de remunicipalización del agua. 31 de marzo. http://www.eldiario.es/politica/Hacienda-persona-primer-remunicipalizacion-servicio__0_627488367.html

Anexo: fin de las concesiones

Ciudad	Concesionaria	Fin de la concesión
Aiguafreda	Grupo Agbar	2017
Castell-Platja d'Aro	Aqualia	2017
Castellfollit de Riubregós	Grupo Agbar	2017
Garriguella	Grupo Agbar	2017
La Llagosta	Grupo Agbar	2017
La Roca del Vallès	Grupo Agbar	2017
Les Franqueses del Vallès	Grupo Agbar	2017
Navata	Grupo Agbar	2017
Palau-saverdera	Grupo Agbar	2017
Pau	Grupo Agbar	2017
Sant Vicenç de Torelló	Grupo Agbar	2017
Santa Eugènia de Berga	Grupo Agbar	2017
Tagamanent	Grupo Agbar	2017
Térmens	Aqualia	2017
Vallromanes	Grupo Agbar	2017
Vilajuïga	Grupo Agbar	2017
Alpens	Grupo Agbar	2018
Guissona	Grupo Agbar	2018
Juneda	Grupo Agbar	2018
Pals	Grupo Agbar	2018
Sant Llorenç d'Hortons	Grupo Agbar	2018
Sant Pere Pescador	Aqualia	2018
Santa Eulàlia de Ronçana	Grupo Agbar	2018
Soses	Aqualia	2018
Torelló	Grupo Agbar	2018
Almacelles	Aqualia	2019
Bescanó	Grupo Agbar	2019
Cadaqués	Aqualia	2019
Castellterçol	Grupo Agbar	2019
Corbera de Llobregat	Grupo Agbar	2019
La Pobla de Massalua	Grupo Agbar	2019
Oliola	Grupo Agbar	2019
Riudaura	Grupo Agbar	2019
Sant Carles de la Ràpita	Grupo Agbar	2019
Sant Cugat del Vallès	Grupo Agbar	2019
Santa Cecília de Voltregà	N/A	2019
Santa Eulàlia de Riuprimer	Grupo Agbar	2019
Albatàrrec	Aqualia	2020
Dosrius	Grupo Agbar	2020
Girona	Grupo Agbar	2020
La Garriga	Grupo Agbar	2020
Mollet del Vallès	Grupo Agbar	2020

Palau-solità i Plegamans	Grupo Agbar	2020
Puigcerdà	Grupo Agbar	2020
Sant Boi de Lluçanès	Grupo Agbar	2020
Sant Martí d'Albars	Grupo Agbar	2020
Súria	Grupo Agbar	2020
Tavèrnoles	Grupo Agbar	2020
Torroella de Montgrí	Grupo Agbar	2020
Ullà	Grupo Agbar	2020
Granollers	Grupo Agbar	2021
L'Estany	Grupo Agbar	2021
Premià de Dalt	Grupo Agbar	2021
Sant Iscle de Vallalta	Grupo Agbar	2021
Sant Martí de Centelles	Grupo Agbar	2021
Sant Vicenç de Montalt	Grupo Agbar	2021
Berga	Grupo Agbar	2022
Cabrera de Mar	Grupo Agbar	2022
Calafell	Grupo Agbar	2022
Cassà de la Selva	Aqualia	2022
Colera	Grupo Agbar	2022
El Masnou	Grupo Agbar	2022
Masquefa	Grupo Agbar	2022
Piera	Grupo Agbar	2022
Vilassar de Dalt	Grupo Agbar	2022
Callús	Grupo Agbar	2023
El Pla de Santa Maria	Grupo Agbar	2023
Molins de Rei	Aqualia	2023
Polinyà	Grupo Agbar	2023
Sant Andreu de la Barca	Aqualia	2023
Sant Quirze del Vallès	Grupo Agbar	2023
Tiana	Grupo Agbar	2023
Avià	Grupo Agbar	2024
Avinyó	Grupo Agbar	2024
Copons	Grupo Agbar	2024
L'Ametlla del Vallès	Grupo Agbar	2024
Santa Bàrbara	Grupo Agbar	2024
Tàrraga	Grupo Agbar	2024
Alcanar	Grupo Agbar	2025
Caldes d'Estrac	Grupo Agbar	2025
Canet de Mar	Grupo Agbar	2025
Castellar del Vallès	Grupo Agbar	2025
Cunit	Grupo Agbar	2025
Isòvol	Grupo Agbar	2025
Llívia	Grupo Agbar	2025
Talamanca	Grupo Agbar	2025
Vespella de Gaià	Grupo Agbar	2025
Xerta	Grupo Agbar	2025